

Informe de Contraloría dejó al descubierto el uso de los recursos públicos

Fiesta en el fin del mundo: cuando el Estado celebra y la gente espera

● En Río Verde, Laguna Blanca y San Gregorio, tres comunidades del interior magallánico, los fondos públicos destinados a festividades contrastan con caminos de tierra, servicios básicos deficientes y el sempiterno olvido que impone la distancia. Una reflexión sobre el sentido de festejar cuando la urgencia cotidiana no da tregua.

Gerardo Pérez

gperez@elpinguino.com

El viento, como siempre, llega primero. Antes de que aparezca el primer estandarte, antes de que el sonido del grupo musical contratado desde Punta Arenas se abra paso en la pampa, el viento ya está ahí, recordando a quienes viven en Río Verde, en Laguna Blanca o en San Gregorio que este territorio no hace concesiones fáciles. Que cada fiesta, cada celebración, cada jornada que interrumpe la rutina, eso tiene un costo y que ese costo, cuando proviene del erario público, merece ser mirado con mayor atención.

No se trata de negar la alegría. Tampoco de condenar la cultura ni el espíritu

comunitario que anima estas celebraciones en localidades donde el tejido social es, en muchos sentidos, el único colchón que amortigua el aislamiento. Se trata, más bien, de una pregunta que debería hacerse cada vez que una administración municipal o un organismo del Estado firma el cheque de una fiesta en estos parajes: ¿Es este el gasto más urgente que puede hacerse aquí?

Río Verde, Laguna Blanca y San Gregorio comparten una geografía de excepción y una condición compartida: son comunidades pequeñas, de baja densidad poblacional, separadas de la capital regional por kilómetros de ruta que, dependiendo de la estación, pueden tornarse intransitables. Sus habitantes conocen bien lo que significa esperar. Esperan la ambu-

lancia cuando el cuerpo falla. Esperan el camión de abastecimiento cuando las alacenas menguan. Esperan que la señal telefónica, aún hoy, les permita comunicarse sin cortarse.

Es en ese contexto donde el gasto festivo adquiere una dimensión distinta. Cuando una festividad financiada con recursos públicos supera -o se aproxima- al presupuesto anual de mantenimiento vial de un sector, o al equipamiento de una posta de salud rural, el contraste deja de ser anecdótico y se convierte en un problema de prioridades. No es un juicio moral; es una aritmética que los propios habitantes de estas localidades conocen de memoria.

En los últimos años, diversas festividades realizadas en estas tres comunas de la Provincia de Magallanes han



FOTOS: CERIUS

Uno de los argumentos es el fortalecimiento de la identidad regional y enfrentar el aislamiento.

movilizado artistas, producción logística, instalaciones efímeras y servicios de catering que difícilmente habrían sido posibles sin el respaldo de

fondos estatales. Los montos exactos no siempre son de fácil acceso para la ciudadanía, y esa opacidad es, en sí misma, parte del problema.

Porque cuando el Estado gasta en zonas aisladas, lo hace con el doble de responsabilidad que en los centros urbanos. Cada peso que llega



Muchos de los servicios que contratan los municipios son de la capital regional lo que escarece los precios.

Muchas de estas actividades cuentan con la participación de personas de otras comunas de la región.

a Río Verde o a San Gregorio viajó más lejos, costó más trasladarlo, y lleva consigo una expectativa mayor. La comunidad lo sabe. Lo sabe el funcionario que gestiona el evento y lo saben los vecinos que, a la mañana siguiente, vuelven a transitar el mismo camino de ripio lleno de baches que nadie ha reparado.

Hay quienes defienden estas fiestas con argumentos atendibles: que la identidad local necesita espacios de expresión, que el encuentro comunitario previene la migración hacia la capital, que sin eventos de este tipo

muchas familias simplemente no tendrían motivos para quedarse. Son argumentos que merecen respeto. Y sin embargo, resulta difícil no preguntarse si esa misma inversión en infraestructura, conectividad o servicios de salud no generaría razones aún más poderosas para arraigar.

La Región de Magallanes y Antártica Chilena, en su área continental americana ocupa el 17% del territorio nacional y alberga poco más del 1% de su población. Esa desproporción geográfica no es un dato menor: significa que el Estado debe hacer

un esfuerzo titánico -y costoso- para prestar servicios en condiciones mínimas de equidad. Significa también que los recursos disponibles para ello son finitos, y que su distribución es una decisión política que tiene consecuencias reales en la vida cotidiana de personas que viven, muchas veces, a merced de las condiciones climáticas y de la voluntad administrativa de quienes están a cientos de kilómetros, una "tierra de pioneros, sacrificio y voluntad de vencer".

No es casual que en estas mismas comunidades

existan escuelas con matrícula mínima que luchan por mantener docentes estables, postas rurales con equipamiento obsoleto, y familias que deben recorrer más de cien kilómetros para acceder a una atención médica de mediana complejidad. Tampoco es casual que, en ese mismo contexto, algunos eventos festivos se hayan convertido en una suerte de vitrina institucional: la foto del alcalde sonriendo ante el escenario montado vale más, en términos de capital político, que la pavimentación de un tramo de ruta que nadie fotografía.

Lo que está en juego, en definitiva, no es si hay que festejar o no. La pregunta más honesta es cuánto, con qué criterio y a expensas de qué se festeja. En territorios donde el aislamiento es una condición estructural y no un accidente circunstancial, cada decisión presupuestaria tiene un peso específico que va más allá de los números. Tiene el peso de las urgencias postergadas.

La fiesta termina. El escenario se desmonta. Los artistas vuelven a Punta Arenas o a Santiago. El viento barre los desechos que quedaron olvidados entre el coirón

de pampa. Y la comunidad -esa misma que bailó, que se encontró, que por unas horas sintió que no estaba tan lejos de todo- vuelve a enfrentar el lunes con las mismas carencias que tenía el viernes. La fiesta pasó. Las necesidades, no.

Esa es la pregunta que los habitantes de Río Verde, Laguna Blanca y San Gregorio tienen todo el derecho de hacer y que las autoridades que administran los fondos públicos tienen la obligación de responder con algo más que una promesa de que el próximo evento será aún mejor.